

DESDE LA LEGALIDAD

Cuando el gobierno traslada a los ciudadanos el convencimiento de que la violencia que ha vivido el país puede tener un final, parece lógico que la colectividad le de un margen de confianza para que trate de lograrlo y así ha reaccionado este país cuando otros presidentes lo intentaron ya que el deseo mayoritario es poner fin a la violencia y al sufrimiento.

Decía el presidente Kennedy que “un programa de acción implica costes y riesgos, pero estos son mucho menores a largo plazo que los costes y riesgos de una cómoda inactividad”. Y es verdad, la obligación de un gobierno es no estar inactivo, es la de actuar con confianza en el Estado de Derecho y en el conjunto de la sociedad ya que un Estado democrático ofrece algo más que mera seguridad, algo más que control de las amenazas y la evitación del daño; asegura las condiciones para crear el principio fundamental de la igualdad de los ciudadanos.

Así lo entendió el gobierno presidido por Zapatero e inició un proceso dirigido a que la violencia terrorista de ETA desaparezca, por fin, de nuestras vidas. Y asumió este reto desde el total respeto al Estado de Derecho y por tanto a las leyes. No ha derogado ninguna de las leyes que nos han servido para luchar contra el terrorismo, no ha evitado que los policías, los jueces, los fiscales sigan actuando y la prueba es que las detenciones de terroristas y los juicios prosiguen, las condenas se dan y se cumplen. Por tanto el gobierno, desde la Ley, sigue luchando contra el terrorismo y ha logrado trasladar una esperanza a la sociedad. Entonces ¿Qué pasa para que se tenga que repetir constantemente que se actúa con las leyes en la mano? Pues que el principal partido de la oposición, responsable del gobierno de la nación hasta hace dos años y que llevo adelante un proceso de pacificación (con el respaldo de la oposición socialista) que fracasó y nadie le pidió cuentas, traslada a la sociedad un mensaje terrorífico: “que el gobierno se ha rendido”. Y no es consciente, o quizá si lo es, que con las trabas que está poniendo no solo dificulta el proceso sino que divide a la sociedad.

No es tolerable poner en cuestión todo el aparato de seguridad del Estado, no es tolerable cuestionar a todos los jueces, a los fiscales y a los policías, por que ellos, que han gobernado, deberían saber de la profesionalidad y la independencia de los mismos. Es, en definitiva una conducta irresponsable que solo tiende a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones a cambio de la creencia de que así consiguen unos pocos votos.

Mantener la confianza en la fuerza y la vitalidad de nuestra democracia precisa como condición inexcusable la confianza en sus instituciones. Mantenerla y contribuir a que aumente es un deber de todos. Quien no lo haga, quien contribuya a sembrar la duda, cuanto mínimo, no es honesto con sus conciudadanos.

Me decían los responsables del periódico que hablase sobre la posible legalización de Batasuna. Tengo poco que decir, para que esto ocurra Batasuna tiene que cambiar, tiene que cumplir las leyes y la primera la de rechazar la violencia. Mientras esto no ocurra no se legalizará, lo diga quien lo diga.

Los socialistas trabajaremos desde la prudencia y con todas las fuerzas políticas desde la convicción de que en democracia y bajo el paraguas de la Constitución todos tenemos cabida; porque, para nosotros, el proyecto a desarrollar y el objetivo a conseguir tiene más importancia que el juicio sobre lo realizado. Y el objetivo es que no haya ni un muerto más.